

# REPÚBLICA DE COLOMBIA



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 11 1 DIC 2020

Auto Interlocutorio No. \_\_\_\_\_

**MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO**

Medio de Control:	Reparación Directa
Expediente:	76001-23-33-000-2019-01130-00
Demandante:	María Lourdes Bolaños Palacios y Otros Apoderado Harold Mosquera Rivas mrabogadosasociados23@hotmail.com
Demandado:	Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto	<b>Remite proceso por Competencia y territorio</b>

La parte actora instauró medio de control de Reparación Directa, pretendiendo<sup>1</sup> declarar administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Nacional de Administración Judicial, por los daños ocasionados a los accionantes por los supuestos errores judiciales cometidos dentro del proceso con radicación No. 11001-31-05028-2008-00265-00, que condujeron a los fallos desestimatorios de las pretensiones de la demanda ordinaria laboral.

Respecto a la estimación de la cuantía, el Consejo de Estado<sup>2</sup> ha recordado que la fijación de los perjuicios causados tiene como finalidad determinar quién es el juez competente para conocer de un determinado proceso. Sobre el particular se ha expresado que:

*“Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto, no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía de las pretensiones formuladas por cada uno de ellos”<sup>3</sup>. (Subrayas por fuera de texto).*

Al momento de estudiar la competencia funcional, se debe analizar de manera individual cada una de las pretensiones de aquellos que se consideran lesionados, para así determinar si es dable admitir o no la demanda.

El numeral 6 del artículo 155 del CPACA, establece lo siguiente:

<sup>1</sup> Ver folios 2 a 3

<sup>2</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, C.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, providencia 19 de febrero de 2019, Radicación número: 11001-03-26-000-2018-00197-00(62962).

<sup>3</sup> Consejo de Estado, auto de 28 de marzo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E) en auto de 2 de mayo de 2016.

**"Art. 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.**  
*Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:*

(...)

**6º.** *De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".*

Ahora bien, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 establece:

*"Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuesto, tasas, contribuciones y sanciones.*

*Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. (...)*

*La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella". (Subrayas y negrillas por fuera de texto)*

En el presente asunto, la parte demandante estimó la cuantía por el valor de \$818.324.519 pesos<sup>4</sup>, haciendo referencia a que dicha suma corresponde solamente a uno de los demandantes en cumplimiento del artículo 157 del CPACA, de la siguiente manera:

JOSE RAMIRO BERNAL	
CONCEPTO	VALOR
PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES	\$75.015.765,46
INDEMNIZACION ART. 64 C.S.T.	\$27.916.646,04
INDEMNIZACION ART. 65 C.S.T.	\$105.143.755,86
INTERESES DE MORA ART. 65 C.S.T.	\$317.460.599,75
SANCION LEY 50 DE 1990	\$292.787.752,39
<b>TOTAL</b>	<b>\$818.324.519,50</b>

Ahora bien, realizando un estudio detallado de cada uno de los conceptos y valores que componen la pretensión mayor señalada por la parte actora, el Despacho encuentra que existe una acumulación de pretensiones en razón a que de conformidad con las previsiones del artículo 157 del CPACA, la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, **intereses**, multas o **perjuicios reclamados como accesorios**, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Es preciso aclarar que, la normatividad en cita cuando refiere que no se pueden tener en cuenta los perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con

<sup>4</sup> Ver folio 12



Radicación  
Medio de control  
Demandante  
Demandado

: 76001-23-33-000-2019-01130-00  
: REPARACIÓN DIRECTA  
: MARIA LOURDES BOLAÑOS PALACIOS Y OTROS  
: NACION - RAMA JUDICIAL - DESAJ

3

posterioridad a la presentación de la demanda, debe entenderse como aquellos valores que aún no se han causado y que el actor pretende le sean reconocidos como consecuencia necesaria y directa del no pago oportuno de sumas reclamadas como principales<sup>5</sup>.

En efecto, la parte demandante estimó la cuantía incluyendo los intereses de mora por un valor de \$317.460.599,75 y la sanción de la Ley 50 de 1990 que equivale a la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías por un valor de \$292.787.752,39, los cuales deben ser descontados de los \$818.324.519 pesos señalados como cuantía.

Así las cosas, el valor exacto a tener en cuenta para determinar la cuantía correspondería a la sumatoria de lo que se pretende como perjuicios materiales como lo son el pago de prestaciones sociales y vacaciones, indemnización de perjuicios por terminación unilateral del contrato sin justa causa (Art. 64 CST), indemnización por falta de pago (Art. 65 CST), sin tener en cuenta los intereses de mora y la sanción de la Ley 50 de 1990.

Realizadas las anteriores previsiones, se tiene que la pretensión en este asunto equivale a **\$208.076.167,5 pesos**, el cual resulta inferior a los 500 SMLMV<sup>6</sup>, por lo que debe darse aplicación al numeral 6 del artículo 155 del CPACA y la competencia para conocer en primera instancia el presente asunto radica en los juzgados administrativos.

Aunado a lo anterior, de la revisión del expediente se observa que el presunto daño que alegan las partes demandantes le es atribuible a providencias emitidas por autoridades judiciales en la ciudad de Bogotá, razón por la cual se remitirá el expediente a dicha jurisdicción.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 del CPACA<sup>7</sup> se ordenará remitir el expediente por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito – REPARTO - de Bogotá, que deberán observar el inciso tercero del artículo 139 del CGP<sup>8</sup> aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

Consejo de Estado – Sección Tercera, C.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ, radicación 50001233100020120019601 (48152)

<sup>5</sup> Salario mínimo 2019 (\$828.116 x 500 = **\$414.058.000**).

<sup>6</sup> ARTÍCULO 168. FALTA DE JURISDICCION O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión  
<sup>7</sup> ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

<sup>8</sup> El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

Radicación  
Medio de control  
Demandante  
Demandado

: 76001-23-33-000-2019-01130-00  
: REPARACIÓN DIRECTA  
: MARIA LOURDES BOLAÑOS PALACIOS Y OTROS  
: NACION – RAMA JUDICIAL – DESAJ



En consecuencia, se,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA** en razón de la cuantía y territorial, para tramitar el presente proceso, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

**SEGUNDO: REMITIR** por competencia en razón a la cuantía a los jueces administrativos de Bogotá (REPARTO), las presentes diligencias.

**TERCERO:** Por Secretaría de esta Corporación realizar las anotaciones pertinentes en el sistema Justicia Siglo XXI<sup>9</sup>.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
Magistrado

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces ( subrayas fuera de texto).

<sup>9</sup> *Artículo 111 del Código de Procedimiento Civil*

*Decreto 2611 de 1990*